

NEO-LIBERALISMO Y TRABAJADORES EN CHILE: PANORAMA DESDE LA CUMBRE APEC, 2004

Augusto Samaniego Mesías

Universidad de Santiago de Chile, Chile. E-mail: asamanie@lauca.usach.cl

Recibido: 21 Marzo 2007 / Revisado: 26 Abril 2007 / Aceptado: 4 Mayo 2007 / Publicación Online: 15 Junio 2007

Resumen: En el presente artículo se analiza la evolución del mundo del trabajo chileno a lo largo de los últimos años, partiendo de la experiencia dictatorial del régimen pinochetista. Años que han estado marcados por la implantación del modelo neo-liberal, con las consiguientes repercusiones sociales y económicas sobre las clases más desfavorecidas, exponiendo cómo la pobreza y la injusticia social se reproducen conforme a la lógica capitalista de las modernizaciones.

Palabras Clave: Chile, neo-liberalismo, globalización, movimientos sociales, identidades de los sujetos del trabajo.

Santiago de Chile, noviembre de 2004. La ciudad capital (con más de cinco millones de habitantes) se vio coyunturalmente bajo medidas de seguridad y 'orden público' hipertrofiadas. Chile fue anfitrión de la reunión de los 'líderes' de 21 economías del 'Asia Pacífico': la APEC. Jefes de Estado (desde Repúblicas a Sultanatos) y ministros. Conjunción de los Presidentes de EE.UU., Rusia, China, Japón, Corea, Canadá, de unos pocos países latinoamericanos, entre los presentes. En el diálogo participaron representantes del alto empresariado o de 'poderes fácticos' de las economías. No ha sido aprobada la participación directa de representantes de organizaciones sindicales o del mundo del trabajo.

En la Cumbre de Santiago, el discurso coincidente del gobierno chileno, de la oposición y del gran empresariado, llamó al orgullo patrio, a la autosatisfacción de colaborar y 'participar' con los grandes la economía mundial, a fin de obtener una más brillante inserción en la globalización neo-liberal.

El eventual bloque de economías de la cuenca del Pacífico cuantifica flujos comerciales o de inversiones cercanos al 60% mundial. Reúne a abultados y débiles PIB nacionales; a países signatarios y otros que rechazan toda regulación en beneficio de la sobrevida del planeta, como el Protocolo de Kyoto.

En fin, el Presidente Bush anunciaba su bien securizado (y misterioso) arribo a Santiago, refiriéndose al gobierno chileno como un amigo confiable, a la par que su disposición a olvidar el rechazo de Chile en el Consejo de Seguridad de la ONU de la propuesta de Washington conducente a involucrar a las Naciones Unidas en la invasión a Irak; tal vez, en aras de celebrar los méritos neo-liberales del modelo de economía de mercado que fue establecido a sangre y fuego por la dictadura y ha continuado durante catorce años bajo gobiernos elegidos democráticamente.

Lo importante es el acicate que la Cumbre APEC en Chile significó para el debate público en que participaron nuevos actores sociales, populares, ciudadanos. Desde 1988 -cuando en un Plebiscito fue derrotada la pretensión del general (r) A. Pinochet de continuar como 'presidente'-, no se manifestaban en las calles 60 mil personas que acudieron a la convocatoria de la 'Coordinadora Anti-APEC'. El Foro organizado por dicha entidad destacó entre los temas a debatir 'la construcción del movimiento social y político'. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) convocó a la 'Cumbre Social y Sindical para un Chile y un Mundo Justo' (16 y 17 /11/04) y convocó a : '[...] abrir un amplio debate con las organizaciones hermanas...sudamericanas y nacionales, los líderes políticos y sociales [...], la sociedad civil, con miras a levantar alternativas desde el mundo social a 'la globalización de la

miseria’, como la llamó Nelson Mandela, y avanzar hacia una inserción en el mundo que supere las visiones neo-liberales mercantilistas y que se oriente a una integración regional que responda a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, con dimensión social, con trabajo decente, con plenos derechos humanos, sociales, laborales y sindicales¹.

Según el imaginario oficial que se proyecta en la TV y otros medios de propiedad altamente concentrada, la carrera hacia las modernizaciones, estaría encadenando éxitos en cuanto al espíritu empresarial, la eficacia, la inteligencia y el consumo de tecnología. Se

argumenta que el crecimiento durante los gobiernos democráticos ha permitido disminuir el índice de pobreza, calculado a inicios de 1990 (fin de la dictadura) en 45%, hasta el 20% a inicios de 2004.

Pero, no es posible desconocer que los desafíos vigentes están regidos por la regresiva distribución del ingreso nacional, situación que coloca a Chile entre los 10 países con máxima injusticia distributiva.

Si ordenamos 5 segmentos de la población de menores a mayores ingresos, tendremos:

Cuadro 1. Distribución del PIB: 2003 – 2004²

Población	PIB per capita 2003 US\$	PIB per capita 2004 US\$	Aumento PIB per capita US\$	Grupos de población
3.876.893	742	778	36	Grupo 1
3.552.390	1.683	1.801	118	Grupo 2
3.152.411	2.766	2.959	193	Grupo 3
2.710.215	5.078	5.433	355	Grupo 4
2.297.238	17.722	18.962	1240	Grupo 5
15.589.147	4.622	4.946	324	Total

En síntesis, el crecimiento del PIB en 2003 implicó que en el 15% de la población de mayores ingresos cada persona obtuviera US\$ 17.222. Y en el 25% de la población con ingresos más bajos, cada persona obtuviese US\$ 742. En 2004 (si el PIB creció 5% y la inflación fue de 2%), el 25% más pobre de los chilenos recibirá un incremento per capita de US\$ 36 y el 15% más rico un plus per capita de US\$ 1.240.

El alza de las exportaciones es la base del crecimiento de 5% del PIB en 2004. Este dato estructural explica, a la vez, porqué el ‘modelo’ no integra a la mayoría de los sectores y actores del sistema productivo: el auge exportador está centrado en el cobre, la pesca, la explotación forestal y de celulosa, agro frutícola y de vinos. En todo ello es alta la presencia de capitales transnacionales.

Las políticas públicas tienen como eje el superávit estructural y no el mejoramiento de los índices y calidad del empleo.

De ese modo, el 96% de las exportaciones son realizadas por el 1% de las empresas y sólo 200 de entre ellas controla el 80% de todo lo

exportado. “O sea, cuando el PIB de Chile crece en 5 puntos, cuatro puntos van para las 200 empresas y 1 punto se lo reparten otras 650 mil”³.

Como un ejemplo relativo a la relación capital – trabajo, se planteaba la interrogante: ¿qué obtuvo la sociedad en 25 años de crecimiento de la explotación casi indiscriminada y exportación de ‘bio-masa oceánica’, pasando desde 650 mil a 8 millones toneladas de pesca anual? La marginación y empobrecimiento de 60 mil pescadores artesanales junto a sus familias. O bien, en las localizaciones modernas del cultivo de salmones, se pagan salarios promedios de US\$ 200, cuando la relación entre ganancias y salarios es de 75% a 25% del ingreso de las empresas y la rentabilidad promedio del capital en el sector pesquero es de 62,2%.

Los consorcios transnacionales cupríferos se opusieron a que se dictase una ley de ‘royalty’, la cual habría significado una tributación muy baja por el uso del recurso natural no renovable. Ellas tributan mínimamente: menos del 10% de

los impuestos que paga la propia empresa estatal *Codelco*. Generan tan sólo el 0,9% del empleo. Se explica así que sus rentabilidades sean tan apreciadas.

Globalmente, la balanza de pagos⁴ evidencia que las empresas del gran capital sacaron del país en el año 6400 millones de US dólares. El modelo neo-liberal (y altamente dependiente) muestra que el capital 'global' presiona por la desprotección de trabajo, del medio ambiente y por no pagar impuestos. En consecuencia, la aplicación del 'modelo' y sus modernizaciones implica que el país continúe siendo exportador de recursos básicos y que no se avance hacia la llamada 'segunda fase exportadora, con valor agregado'.

Volviendo a la relación Chile-APEC, el 90% de los productos que el país exporta hacia esa zona son 'recursos naturales' y 'naturales procesados'; pero el 56% corresponde a los sectores minero y forestal. El 53% de la 'inversión extranjera directa' (IED) en Chile proviene de la zona APEC. Pero, el 56% de ella es de EE.UU. y el 29% de Canadá. Asia-Pacífico invierte poco, sólo Japón aparece con un 6%. Así, sólo 4 países de los 21 que conforman APEC explican el 92% de la IED.

Las exportaciones (agosto 2004) crecieron en 63% hacia la Unión europea; 35% hacia EE.UU. y 96% hacia Canadá (según la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable: ACJR).

No obstante, los tratados de libre comercio y el aumento de exportaciones no han mejorado la distribución del ingreso ni la tasa de desempleo que se mantiene bordeando el 10% de la fuerza de trabajo.

Considerando el panorama que pudimos visualizar desde la Cumbre APEC de Santiago, cobrará mayor sentido la siguiente síntesis analítica referida a aspectos históricos de la situación del mundo del trabajo bajo el desarrollo que llevó al orden neo-liberal en Chile.

1. LOS SUJETOS DEL TRABAJO Y EL SINDICALISMO 'DE CLASE'(1953-1973)

Cada vez que los sujetos populares creyeron y actuaron por la 'transformación de las estructuras', lo hicieron como sujetos del mundo concreto del trabajo; reivindicaron derechos laborales, cuestionaron las relaciones sociales en

las empresas llegando a reclamar su participación en la gestión de las mismas, asumiendo como propia la realización de la reforma agraria (desde 1967), etc. Igualmente, actuaron desde los territorios donde reproducen la vida y terminan de realizar sus derechos de 'ciudadanos' (sustentados por el salario ganado en la empresa como 'trabajadores'): luchas por la vivienda, el costo de la vida, la educación, el tiempo libre, derechos de asociación y de sufragio, etc. Los asalariados se fortalecieron amplificando y complejizando el conjunto de relaciones de fuerzas que ubican, conceptualmente, al Estado en la dinámica interacción entre sociedad civil y sociedad política.

De ese modo, entre 1952 (año del Congreso de Reunificación Sindical, que creó la Central única de Trabajadores de Chile - CUT) y 1973, el movimiento sindical creció hasta constituirse en el eje articulador de los demás movimientos populares. Sobre todo, la CUT logró representar al número creciente de asalariados ante los componentes de la sociedad política: partidos, parlamento, gobierno. Fue, al mismo tiempo, representante de esos movimientos populares ante la otra fuerza decisiva de la sociedad civil: el empresariado.

* 1952/62: mientras en la conducción de la CUT prevaleció la ideología y el método 'revolucionario' de 'la huelga general', la tasa de sindicalización permaneció estancada cerca del 12,5% de la fuerza de trabajo. Luego del Tercer Congreso Nacional (agosto de 1962), los partidos de izquierda (comunista: PC y socialista: PS) -ahora a la cabeza de la CUT - vincularon la estrategia sindical con el proyecto político de transformación 'socialista' del FRAP. El sindicalismo influyó, también, sobre el partido Demócratacristiano -DC-, afirmando el proyecto 'socialista-comunitarista' de cambio social.

* 1963/70: en el contexto de la 'revolución en libertad', la estrategia de la CUT se basa en la defensa de la 'unidad sindical' (desde el sindicato único por empresa hasta la Central nacional). Esa estrategia resulta exitosa y se hace portadora de los grandes objetivos del cambio estructural: nacionalizaciones; apoyo a la reforma agraria y a la sindicalización campesina; las propuestas de reformas bancaria, tributaria; el apoyo a los movimientos poblacionales, de reforma universitaria, etc. Hacia mediados de 1970, la tasa de

sindicalización superó el 34%. La CUT optó por comprometerse con el proyecto político de la izquierda: el programa de la Unidad Popular (UP).

* 1970/73: la profundización de las luchas de clases bajo los impactos de la aplicación del programa de la UP, desafiaron el devenir del sindicalismo, su relación con los partidos, el gobierno y, a la vez, su capacidad para responder a las nuevas actitudes e identidades de los sujetos populares que se incorporaban al proceso sociopolítico, en el curso de la agudización de la crisis nacional.

Los sindicatos legales crecieron en 3,4% en 1971 y en 18,8% durante el primer semestre de 1972. El ritmo del incremento de la organización sindical sobrepasaba las formalidades legales. La tasa de sindicalización llegaba al 38% en agosto de 1972. La coyuntura del 'paro empresarial' (conocido como 'de los camioneros') de octubre de ese año y la contraofensiva sindical, llevaron -en nuestra opinión- la tasa de organización por sobre el 40% de la fuerza de trabajo.

La memoria colectiva, entonces, insta a pensar históricamente el 'auge' y la 'caída' de la estrategia de 'unidad de los trabajadores' vivida durante aquellas dos décadas, y que generó un amplio movimiento social en favor de la superación del capitalismo.

Desde los '60, nuevas formas de organización del trabajo en la gran empresa dieron cuenta de las modernizaciones: la transición desde los métodos pre-tayloristas a los tayloristas elevaron la productividad donde se aplicaban tecnologías avanzadas, al tiempo que produjeron fluctuaciones serias de la tasa de desempleo o cesantía. Creció la dispersión de la pequeña y mediana industria, implicando también la atomización del sindicalismo. El movimiento sindical enfrentó desafíos mayores para integrar la clase obrera tradicional (núcleo minero-fabril), junto a los asalariados de los servicios públicos, con los 'nuevos' sectores organizados en la industria transformativa, los servicios modernos, el agro reformado.

La relación entre sindicalismo y política llevaba a identificaciones claras con 'los proyectos globales' que tensionaban al movimiento social. La identificación de la estrategia sindical de la CUT con la UP parecía ser una demostración exitosa de la definición 'clasista' de la

organización, en la medida en que 'la nueva clase obrera' se radicalizaba sumándose a los objetivos anti-capitalistas. La constitución del Área de Propiedad Social (APS) pasó a ser terreno de luchas por incorporar a ella todo tipo de empresas no oligopólicas y, por lo tanto, jamás consideradas como expropiables por el programa de la U.P., ni incluidas entre las 91 empresas 'estratégicas' por el programa de gobierno. Así se aceleraba la crisis de la conducción económica y de la capacidad del gobierno y los partidos de la UP para mantener la iniciativa política.

La CUT, habiendo alcanzado la cúspide de su representatividad durante el intento político/empresarial para derrocar institucionalmente a Allende (octubre de 1972), experimentó casi abruptamente el estrechamiento de su capacidad para orientar un movimiento sindical multipolarizado. La nueva forma de organización territorial de los trabajadores que crearon 'Cordones Industriales' y la ineficacia que va manifestando el Acuerdo CUT/ Gobierno para implementar marcha de la participación de los trabajadores en la gestión de empresas del APS (o intervenidas temporalmente por el gobierno), terminan por evidenciar el agotamiento de la estrategia sindical basada en el criterio de la unidad de los trabajadores. En efecto, la estrategia sindical (gestada en los '60) se había subsumido en las políticas partidarias, que se contraponían en el seno de la UP.

La influencia de la DC en la CUT, a su vez, había impulsado a sectores importantes de asalariados a someterse a la estrategia política opositora al gobierno de Allende. Los partidos de la UP y el gobierno carecían de estrategias viables. La acción unida de comunistas y socialistas tuvo su momento inicial con el Frente Popular en 1938. Luego, se impuso un período (relativamente largo) de separación, acompañada de un repliegue significativo del movimiento social y de la izquierda política. La acción conjunta se reinició con la primera candidatura de Allende, en 1952. Todo aquel trayecto culminaría en el triunfo electoral de 1970, de manera tal que la experiencia de los mil días de Allende asumió una significación universal:

“la enunciación vaga, pero reiterada y atrayente, de que sería viable el tránsito del capitalismo al socialismo sobre otros supuestos que los del enfrentamiento armado y la dictadura del proletariado”⁵.

No obstante, la alianza política de la UP no era entonces más amplia que lo que fuese el Frente Popular (1939). En 1970, los marxismos del PC y PS concluían que ambos partidos garantizaban la hegemonía de la clase obrera dentro de la UP. Mientras tanto, la DC ocupaba el lugar que durante el frentepopulismo tuvo el partido Radical; es decir, la representación de la burguesía media, de categorías diversas de las capas intermedias y, además, una importante influencia sobre masas de asalariados del trabajo manual.

La experiencia de la UP tuvo como matriz teórica, la concepción clásica de la destrucción del Estado burgués bajo la supuesta hegemonía de partidos que se veían a sí mismos dotados de una teoría acabada, inamovible y, por lo mismo, capaces de representar en el poder a la clase obrera y a otras masas populares. Sin embargo, esos partidos imprimieron a sus enconadas contradicciones un supuesto sentido estratégico: la disputa sobre las 'vías' que podían conducirlos a ganar el poder y a desarrollar las nuevas estructuras de un socialismo en Chile.

Lo cierto es que, tanto el 'rupturismo' y la solución armada del problema del poder (PS), como el 'gradualismo' y su vía política institucional (PC) argumentaban sus legitimaciones mediante la teoría de la revolución socialista codificada como marxismo-leninismo. Ambas 'estrategias' preveían como ineludible 'la dictadura del proletariado' en tanto método que atribuía a los 'socialismos reales' el carácter de modelos generales. Esas certezas 'teóricas' suponían que las sociedades y Estados socialistas existentes habrían encarnado históricamente la fusión entre la teoría y las prácticas que satisfacían a dicha teoría (y al ideal socialista).

Así, se hallaba denegada la posibilidad de una reelaboración teórica que lograra proyectar la propia creación histórica cumplida a través de décadas de luchas que vinculaban la democracia y el cambio anti-capitalista. Ante la envergadura de 'lo nuevo', no pudo lograrse consolidarse la estrategia (de Allende, y de la práctica empírica del PC) de profundización de la democracia, entendida como el camino del socialismo.

Otro aspecto clave dice relación con el rol atribuido por las ideologías de la izquierda a los sujetos sociales en la transformación social. El 'polo rupturista' antepone la voluntad clasista para resolver el problema del poder. Para ello

atribuía a ciertos sectores populares -importantes, pero minoritarios la función de una vanguardia radicalizadora. El 'polo gradualista' destacaba la necesidad de ganar 'la batalla de la producción', del éxito económico para ampliar la base social de apoyo al cambio por vía institucional. Esa posición intentaba continuar el camino recorrido con éxito, acumulando fuerzas sociales, durante tres décadas al menos. Ahora, con el gobierno de Allende, lo decisivo pasaba a ser el éxito económico, que a su vez dependía de la capacidad de transformar al APS, en el corto plazo, en el 'factor dominante' de la economía nacional.

Ninguna de esas políticas -que envolvían distintos signos de voluntarismo- pudo modificar la naturaleza de las prácticas sociales, ni abreviar los tiempos históricos que los diversos sujetos sociales requerían para asumir sus roles e identidades en favor del cambio social. Estamos pensando en procesos de construcción de una conciencia autónoma de los actores populares.

En verdad, procesos que permanecen aún inéditos. La lógica política agudizada por la crisis exigía al 'ciudadano' que optara por una trinchera partidista, que subsumiera a los movimientos sociales en 'el tiempo de la acción política' exacerbada. La vorágine de la cuestión del poder ahogaba las experiencias vividas colectivamente en 'el tiempo para fraguar el movimiento social'; es decir, aquellas vivencias capaces de unir y dotar a los actores populares de una común voluntad de cambio. Y de unas prácticas que construyesen una 'sociedad civil' mucho más fuerte.

Esa es la condición irremplazable para fortalecer la democracia; es decir, los sujetos y movimientos populares requieren dotarse de mayor autonomía (relativa) y más fuerza en su interacción con la 'sociedad política'. La multiplicidad de las organizaciones de la 'sociedad civil' actúa como la principal fuerza para democratizar la 'sociedad política'.

La hegemonía (o dirección intelectual y moral) ganada por las clases subordinadas será, entonces, resultado de la penetración de los movimientos sociales en la sociedad política, bajo el supuesto de que el sentido común democrático de las mayorías abre la posibilidad de desarmar 'los instrumentos de la coerción' del Estado y el poder del capital.

2. DE LA DICTADURA A LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN: NEO-LIBERALISMO Y MUNDO DEL TRABAJO

La dimensión de los cambios -asociados a la 'refundación capitalista' y a la adscripción a los mercados globalizados y nuevas exigencias de la división internacional del trabajo-, impusieron la reformulación del Estado: como Estado de excepción / terrorismo de Estado y como post-dictadura que ha funcionado entre 1990 y 2004 dentro de la democracia restringida heredada por la dictadura.

Las etapas cumplidas por la dictadura fueron: primero (entre 1974 y 1982), la destrucción del modelo de acumulación del capital vinculado a la industrialización sustitutiva, a las estatizaciones y la reforma agraria; y, luego,

(entre 1983 y 1989) el desarrollo de las modernizaciones. Así, en el año 1982 existían 1,2 millones de trabajadores cesantes (incluido los Programas de 'Empleo Mínimo' y de 'Jefes de Hogar').

En 1990, el vuelco era enorme: los 'sin trabajo' habían disminuido a 300 mil. En ocho años, un millón de chilenos había modificado su situación ocupacional. Creció de manera fundamental la categoría de asalariados; aumentaron también los trabajadores por cuenta propia⁶.

Hoy, en 2004, la tasa de sindicalización efectiva en Chile no sobrepasa el 10%. En 1973 la organización sindical se empujó al 40%. Veamos la tendencia en los años 90⁷:

Cuadro 2. Tasa de sindicalización efectiva en Chile

Año	Trabajadores ocupados (miles)	Nº de Socios	Nº de Sindicatos	Tasa de afiliación %	% Crec. de afiliados	Promedio socios por sindicato
1989	4.424,8	507.616	7.118	11,5	13,8	71,3
1990	4.459,6	606.812	8.861	13,6	19,5	68,5
1991	4.540,4	701.355	9.858	15,4	15,6	71,1
1992	4.773,3	724.065	10.756	15,2	3,2	67,3
1993	4.985,7	684.361	11.389	13,7	-5,5	60,1
1994	4.988,3	661.966	12.109	13,3	-3,3	54,7
1995	5.025,8	637.570	12.715	12,7	-3,7	50,1
1996	5.298,7	655.597	13.258	12,4	2,8	49,4
1997	5.683,8	613.123	13.795	10,8	-6,5	44,4

Características evidentes del trabajo asalariado, son su fragmentación, la precariedad de los contratos, la debilidad social y legal de sus organizaciones y la pérdida de los derechos laborales.

El marco ideológico neo-liberal de lo que llaman 'modernización de las relaciones laborales' y que, en la práctica, sirve de freno y de control -por parte del empresariado- a la sindicalización, se expresa en políticas de:

-sub-contratación de servicios (externalizaciones);

-modernización de la gestión, especialmente informacionalización;

-dispersión física de los trabajadores;

-la llamada 'flexibilización laboral'.

Ideología y política neo-liberal apuestan al debilitamiento o inexorable anomia de la acción colectiva desde los lugares de trabajo. El individuo sometido al mercado esta destinado a 'ver' su bienestar como acceso al consumo, a los mercados. Concibe al 'ciudadano' mediante una identidad sometida enteramente a circunstancias extra-laborales, desde fuera de los procesos

productivos donde se reproduce el capitalismo: el barrio, la iglesia, el ocio, etc.

Los estudios estiman que en 1960 el 20% de los ocupados correspondía a la categoría ‘empleados’ y el 45% a la de ‘obreros’, mientras que en 1992 33% eran ‘empleados’ y 30 % ‘obreros’.

A fines de los 90 el 25% de los ocupados trabajaba en la ‘pequeña empresa’, es decir establecimientos con menos de 10 operarios (hombres: 18,9%; mujeres 34,9%)⁸. En los 2000 las PYME generan sobre el 80% del empleo.

El tamaño de los sindicatos disminuyó desde un promedio de 122 afiliados en 1970/73 a 69,2 afiliados en 1988 y 42,2 afiliados en 1999.

Cuadro 3. Conflictividad social en Chile

Años	1989	1992	2002
N° huelgas	101	247	117
personas/huelga	17.857	26.962	14.662
días/hombre/huelga	298.561	334.708	207.224

Desde la derrota del dictador en el plebiscito de 1988 la aspiración democrática y de reparaciones sociales se hizo sentir (el peak de 724 mil huelguistas se dio en 1992). Las frustraciones acumuladas en el mundo del trabajo crearon situaciones de clara indefensión al manifestarse la recesión en 1998. En efecto, el trienio 1998-2000 con tasas de crecimiento bajas o, incluso negativas (-0,8%) y tasas de desempleo de dos dígitos influyó en actitudes pasivas para ‘cuidar el puesto de trabajo’.

En 2001-2002 casi el 50% de las paralizaciones no fueron legales, particularmente ante la imposibilidad de ejercer la ‘negociación colectiva’¹⁰. Probablemente el sentimiento de indefensión de los trabajadores hace que en el 76% de los conflictos sean los asalariados los que solicitan la mediación de organismos estatales para resolverlos, aunque el involucramiento gubernamental no es muy eficiente. El 91,6% de los trabajadores se declaraba partidario de ‘utilizar el diálogo directo hasta agotar las conversaciones’; sólo el 27% prefería ‘realizar manifestaciones de hecho para mostrar una actitud firme ante el empleador’.

La cobertura de los trabajadores con derechos legales a ‘negociar colectivamente’ con las empresas se redujo durante la democracia: en 1991 se dio derechos al 14,3% del total de asalariados y en 1997 la legislación daba esa posibilidad sólo al 10,9% de asalariados. A ello se han sumado todo tipo de prácticas anti-sindicales.

Con todo, las prácticas defensivas se manifiestan en la cifra oficial de 27 mil trabajadores que ejercieron ‘huelgas legales’ en 1995 y otros 295 mil que participaron en ‘paralizaciones de hecho’, especialmente funcionarios públicos.

Pero, desde la perspectiva de 2004 se constata que la movilización reivindicativa apreciada en días/hombre en huelgas ha disminuido respecto de la fase 1989 – 1997⁹:

Cabe señalar que, elegido el primer gobierno democrático, en 1990 imperó un ‘clima de diálogo’ que llevó al llamado Acuerdo Marco entre la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC: organismo ‘gremial’ máximo de los patrones, dirigido por el empresariado oligopólico). Venciendo resistencias, en 1993 se aprobó una Reforma Laboral (ley 19069) que mejoró parcialmente la posibilidad del ejercicio del derecho a huelga. Se adecuaron en parte (ley 19250) las normas sobre ‘contrato individual’, ‘prácticas flexibles de contratación’, de la sub-contratación, el trabajo a domicilio y, muy levemente, las que afectan a los trabajadores agrícolas.

La CUT convocó, en ese escenario, a una Primera Protesta Sindical, el 11 de julio de 1994. En el plano socio-político se acumulan frustraciones entre dirigentes sociales adherentes de los partidos de gobierno (la coalición Concertación por la Democracia); los representantes sindicales alcanzan poca interlocución con las cúpulas partidarias.

En el segundo gobierno democrático, se endurecieron las posturas del alto empresariado y el ‘diálogo’ con organizaciones sindicales fue

prácticamente imposibilitado. En especial, los grandes patrones denostaron toda legislación sobre negociación colectiva. En 1996, la Directora del Trabajo (que fue reemplazada en 2004, con gran beneplácito de los voceros del empresariado) señaló que el 80% de las empresas incumplían la legislación laboral. En ese contexto pudo ser eliminado el nefasto artículo 155 que permitía la expulsión de trabajadores ‘sin expresión de causas’. No obstante el derecho a huelga continuó muy restringido, puesto que los empresarios pueden, después de cumplido un plazo de la ‘huelga legal’, contratar nuevo personal.

El Chile de mediados de los 90 figuró como el país cuyos individuos realizaban más horas de trabajo por año. (se podía decir: ‘trabaja como chino o ¿como chileno?’). Las bajas tasas de productividad, asociadas a ‘salarios mínimos’, no hacen sino empeorar la calidad de vida.

Por cierto, la reestructuración social no significó ‘integración social’, dignidad del trabajo, previsión, seguridad. Los puestos de los asalariados no han cesado de hacerse más y más precarios y desprotegidos ante los abusos. Los nuevos pobres en Chile -por extensión, el mundo popular- no son ciudadanos marginalizados sólo por efecto de la cesantía. La masa de trabajadores está compuesta de asalariados y sus familias que pagan muy caros sus ‘fondos de pensiones’ (AFP) o ‘de salud’ (FONASA o ISAPRES). Fueron entonces ‘integrados’, como lo quiere el sistema.

Al respecto, resulta indicativo que en agosto de 1998 sólo 55,3% de los 5,9 millones de trabajadores afiliados a las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) tenía ‘cobertura’ efectiva, es decir se hallaban desprotegidos porque sus patrones no pagaron las cotizaciones a las AFP (aunque descontaran un porcentaje de los salarios). En 1997 cerca de 2 millones de trabajadores (de una fuerza de trabajo ocupada de 5.683.800 personas) estaba fuera del sistema de fondos de pensiones por cese en sus cotizaciones.

La Encuesta CASEN, en 1994, detectaba un 19,3% de los ocupados sometidos a contratos ‘inestables’. Pero, estudios de la Dirección General de Trabajo establecían se encontraban en situación de inseguridad y precariedad laboral el 25% de los asalariados con empleo permanente; el 44% de los con contrato a plazo

fijo; 79% de los con contrato por faena y el 90% de los contratados por servicios.

En 1995, con base en el trimestre octubre-diciembre, el ‘empleo informal’ llegó a 1.789 937 asalariados, es decir, 35,8% de los ocupados; en tres años el empleo informal había subido en 14,3 puntos porcentuales. Tal ‘coyuntura’ ejemplifica las fluctuaciones bruscas que amenazan a los trabajadores.

Las tendencias aludidas fueron conformando *la realidad de los salarios* y su relación con la ‘línea de la pobreza’ a lo largo de la década de los 90. Un estudio acucioso sobre el mercado de trabajo, salarios y pobreza nos muestra que a fines del pasado decenio ‘la línea de la pobreza’ quedaba demarcada por un nivel de ingresos equivalente a 168.576 pesos. “El resultado es que cerca del 60% de los trabajadores de Chile no cuentan con un salario suficiente como para permitirles salir de la pobreza. Simultáneamente están siendo remunerados por debajo del costo de su fuerza de trabajo [...] el mercado de trabajo ya no aparece como el principal recurso para la integración social [...] (es) un mecanismo reproductor de la pobreza”. Con los mismos parámetros se establecía que el 57,3% de los asalariados percibía menos de 128.800 pesos mensuales y el 85,4% no alcanzaba un salario de 257.600 pesos¹¹.

El éxito relativo (a la desmovilización imperante desde inicios de los 90) del *Paro* -o huelga- *Nacional* convocado por la CUT el 13 de agosto 2003 -el único en 14 años de post-dictadura bajo gobiernos de la Concertación-, tal vez marque un hito significativo para los análisis actuales que expliquen la principal ‘novedad’ política reciente: el 9,14% de los votos emitidos en las elecciones municipales de 2004 que obtuvo la coalición ‘Juntos Podemos’ (‘poder democrático social’). Dicha alianza está conformada por comunistas, humanistas, ambientalistas, socialistas disidentes, entre otras tendencias¹². El futuro posible de los movimientos sociales y del sindicalismo, también se vincula al futuro de ‘otra izquierda’ que sostiene la unidad de quienes aspiran a superar el modelo neo liberal.

CONCLUSIÓN

La pobreza y la injusticia social se reproduce conforme a la lógica capitalista de las modernizaciones, las ‘ventajas comparativas’ y la ‘competitividad’ asentadas en la explotación

de trabajo, en los mercados altamente oligopólicos.

La base del control de los trabajadores está en la empresa, en los mecanismos de incremento de la tasa de plusvalía y en las formas de control social: imposición de máximas cadencias del trabajo, una cultura empresarial de anti-sindicalismo, lucha sin cuartel contra todo intento de 'negociación colectiva' y contra la ampliación de los derechos sindicales que pudieran regular los mercados laborales.

El Estado asume la tarea de resguardar la estabilidad del sistema. Las privatizaciones de empresas y otros activos sociales (y rentables bajo la anterior gestión estatal), el control de los índices macro-económicos del crecimiento y la contención del gasto social, contrastan con el empeoramiento de la distribución del ingreso durante el periodo post-dictadura y el aumento de las brechas entre altos medios y bajos ingresos en cuanto a la 'equidad de oportunidades' respecto del acceso a la educación, la salud, la estabilidad laboral o los puestos de trabajo, etc.

El modelo neo-liberal y el pensamiento único contrastan igualmente con los requisitos del desarrollo sustentable social, medio ambiental y ecológicamente.

Las preguntas acerca de la autoconstrucción de los sujetos del cambio social -después de tantas crisis- merodean y penetran positivamente en las ciencias sociales. Y están ya presentes en la memoria para la acción.

En Chile, ante el incuestionable peso del Estado sobre la sociedad y su historia; frente a la capacidad de sobrevida y reposición de los actores principales de la 'sociedad política' en el manejo del Estado, se mantiene la interrogante: cómo desarrollar una 'sociedad civil' más sólida y amplia y hacerla fuerza cardinal de los intereses populares y democráticos del cambio social.

En Chile se desarrollaron grandes movimientos sociales, que impulsaron una voluntad anti-capitalista. Sin embargo, permanecieron (y permanecen hasta ahora) claras dificultades para que esos sujetos colectivos realizaran sus 'conciencias sociales' con la necesaria autonomía relativa frente a los componentes y al total del sistema político. Esa dificultad interpela hoy, diariamente, la relación de los actores sociales con la política, con la democracia y el Estado.

La sociología instaló, casi al inicio del período del medio siglo que nos antecede, la noción de '*Estado de compromiso*', subrayando la capacidad desplegada por la 'sociedad política' a fin de ejercer la cooptación de los movimientos sociales desde los espacios donde se disputa el poder. En igual sentido, ocurre la rápida instrumentalización de los procesos sociales por parte de los partidos, transformando a esas fuerzas sociales en apoyo a sus lógicas específicas de participación en el poder. Así, los partidos han desarrollado sus proyectos tomando en sus manos -diríamos de manera 'natural'- la representación de los movimientos surgidos en la sociedad.

El medio siglo (largo) nos indica que las identidades de los sujetos del trabajo no se construyen ni re-construyen fuera de la historia realizada por ellos mismos. Las clases populares no se constituyen como movimientos y actores sociales en la 'infraestructura' de la formación económico-social. No son sujetos inermes de las estructuras económicas. Se conforman, al contrario, a través de sus culturas, de la comprensión de sus experiencias vividas, de sus subjetividades.

Creemos que los vínculos entre 'lo social' y 'lo político' pueden ser recreados mediante la iniciativa permanente de los movimientos sociales, imponiendo un 'nuevo respeto' por sus propias identidades y autonomías. Estas últimas se relativizan porque 'lo social' contribuye poderosamente a reconfigurar la sociedad política (la fórmula 'utópica': politizar lo social, socializar la política). El futuro es una comprensión de los caminos andados: los movimientos populares creando otra sociedad.

NOTAS

¹ *El Siglo*, 26 de noviembre de 2004.

² Vid. Pizarro, Roberto, *El Periodista*, noviembre 2004.

³ Vid. Claude, Marcel, "Fundación Oceana". *Punto Final*, noviembre 2004.

⁴ Banco Central de Chile, septiembre 2004.

⁵ Tomic, Radomiro, *Chile, 1970-1973. Lecciones de una Experiencia*. Madrid, Tecnos, 1977.

⁶ Díaz, Álvaro, "Nuevas tendencias en la estructura social chilena". *Proposiciones*, 20 (1991).

⁷ Cuadro en González S., Cristian, "El derecho laboral en Chile", en Patricio S. Escobar (ed.), *Trabajadores y empleo en el Chile de los noventa*. Santiago, LOM, ARCIS, PET, 1999.

⁸ *Encuesta Suplementaria de Ingresos*. Santiago, INE, 1996.

⁹ Vid. Rojas F., J.; Aravena C., A., “El mundo sindical y el trabajo asalariado en Chile”, en Patricio Escobar S. (ed.), *Trabajadores...*, op. cit.

¹⁰ *Encuesta Nacional de Relaciones Laborales, 2002.*

¹¹ Vid. Escobar S., Patricio, “Hacia una caracterización del mercado de trabajo”, en id. (ed.), *Trabajadores...*, op. cit.

¹² “Juntos Podemos” es la izquierda extraparlamentaria. Se ve totalmente excluida del Parlamento sólo a causa del sistema electoral binominal, el cual forma parte de los amarres institucionales que impuso la dictadura antes de dejar el Poder Ejecutivo. No ha sido modificado porque, gracias a la misma ley, a la derecha le basta con obtener un 35% de los votos para igualar a la Concertación en el Legislativo y se opone a reemplazar el binomiarismo.